**INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 147/2025
ACTOR: MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL
AMATLÁN, ESTADO DE OAXACA
SUBSECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS
SECCIÓN DE TRÁMITE DE CONTROVERSIAS
CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD**

En la Ciudad de México, a treinta y uno de marzo de dos mil veinticinco, se da cuenta al **Ministro Alberto Pérez Dayán, instructor en el presente asunto**, con la orden de formar el presente incidente de suspensión, dictada en el auto de admisión de esta fecha, en el expediente principal de la controversia constitucional indicada al rubro. Conste.

Ciudad de México, a treinta y uno de marzo de dos mil veinticinco.

Conforme a lo ordenado en el proveído de admisión de esta fecha, **fórmese y regístrese el expediente físico y electrónico del presente incidente de suspensión** y, a efecto de proveer sobre la medida cautelar, se tiene en cuenta lo siguiente.

I. Fundamentos jurídicos de la suspensión. De los artículos 14, 15, 16, 17 y 18 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que la medida cautelar:

1. Procede de oficio o a petición de parte y podrá ser decretada en todo momento, hasta antes de que se dicte sentencia definitiva;

2. Procede respecto de actos que, atendiendo a su naturaleza, puedan ser suspendidos sus efectos o consecuencias;

3. No podrá otorgarse en los casos en que la controversia constitucional se hubiera planteado respecto de normas generales;

4. No se concederá cuando se pongan en peligro la seguridad o economía nacionales, las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano o pueda afectarse gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante;

5. El auto de suspensión podrá ser modificado o revocado cuando ocurra un hecho superveniente que lo fundamente, y

6. Para su otorgamiento deberán tenerse en cuenta las circunstancias y características particulares de la controversia constitucional.

En relación con lo anotado, resultan aplicables las tesis emitidas por esta Suprema Corte, de rubro y texto siguientes:

“SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NATURALEZA Y FINES. La suspensión en controversias constitucionales, aunque con características muy particulares, participa de la naturaleza de las medidas cautelares, por lo que en primer lugar tiene como fin preservar la materia del juicio,

asegurando provisionalmente el bien jurídico de que se trate para que la sentencia que, en su caso, declare el derecho de la parte actora, pueda ejecutarse eficaz e íntegramente y, en segundo, tiende a prevenir el daño trascendente que pudiera ocasionarse a las partes y a la sociedad en general en tanto se resuelve el juicio principal, vinculando a las autoridades contra las que se concede a cumplirla, en aras de proteger el bien jurídico de que se trate y sujetándolas a un régimen de responsabilidades cuando no la acaten. Cabe destacar que por lo que respecta a este régimen, la controversia constitucional se instituyó como un medio de defensa entre poderes y órganos de poder, que tiene entre otros fines el bienestar de la persona que se encuentra bajo el imperio de aquéllos, lo que da un carácter particular al régimen de responsabilidades de quienes incumplen con la suspensión decretada, pues no es el interés individual el que se protege con dicha medida cautelar, sino el de la sociedad, como se reconoce en el artículo 15 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.¹

"SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS. La suspensión en controversias constitucionales, aunque con características muy particulares, participa de la naturaleza de las medidas cautelares, entendidas éstas como instrumentos provisionales que, permiten conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes o a la sociedad, con motivo de la tramitación de un juicio. Así, la suspensión en controversias constitucionales, en primer lugar, tiene como objeto primordial preservar la materia del juicio, asegurando provisionalmente la situación jurídica, el derecho o el interés de que se trate, para que la sentencia que, en su caso, declare el derecho del actor pueda ser ejecutada eficaz e íntegramente, y en segundo lugar, tiende a prevenir un daño trascendente que pudiera ocasionarse a las partes, en tanto se resuelve el juicio principal. Por lo que se refiere a sus características especiales, de los artículos 14, 15, 16, 17 y 18 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal se desprenden las siguientes: a) procede de oficio o a petición de parte y podrá ser decretada hasta antes de que se dicte sentencia definitiva; b) no podrá otorgarse en los casos en que la controversia se hubiera planteado respecto de normas generales; c) no podrá concederse cuando se pongan en peligro la seguridad o economía nacionales, las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano o pueda afectarse gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante; d) el auto de suspensión podrá ser modificado o revocado cuando ocurra un hecho superveniente que lo fundamente; y e) para su otorgamiento deberán tenerse en cuenta las circunstancias y características particulares de la controversia constitucional. Por tanto, salvo los casos expresamente prohibidos por el artículo 15 de la Ley Reglamentaria de la materia para el otorgamiento de la suspensión en una controversia constitucional, ésta deberá concederse cuando así proceda, pues de otra forma, dicha medida cautelar se haría nugatoria, lo que desnaturalizaría por completo la suspensión en este medio de control constitucional, privándola de eficacia."²

Como se advierte de los criterios jurisprudenciales antes transcritos, la suspensión en controversias constitucionales participa de la naturaleza de

¹ Tesis **27/2008**, Jurisprudencia, Pleno, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil ocho, página mil cuatrocientas setenta y dos, con número de registro 170007.

² Tesis **1a. L/2005**, Aislada, Primera Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, correspondiente al mes de junio de dos mil cinco, página seiscientos cuarenta y nueve, con número de registro 178123.

las medidas cautelares por lo que, en primer lugar, tiene como fin preservar la materia del juicio, para asegurar provisionalmente el bien jurídico de que se trate, así como para que la sentencia pueda ejecutarse eficaz e íntegramente, de modo que tiende a prevenir el daño trascendente que pudiera ocasionarse a las partes y a la sociedad en tanto se resuelva el juicio principal.

En ese orden de ideas, la suspensión constituye un instrumento provisional cuyo propósito es impedir que se ejecuten los actos impugnados o que se produzcan o continúen realizando sus efectos hasta en tanto se dicta sentencia en el expediente principal, a fin de preservar la materia del juicio, así como evitar se causen daños y perjuicios irreparables a las partes o a la sociedad, siempre que la naturaleza del acto lo permita; y, en su caso, no se actualice alguna de las prohibiciones que establece el numeral 15 de la Ley Reglamentaria.

II. Norma, actos combatidos y antecedentes. En la demanda de controversia constitucional la Síndica del Municipio de San Cristóbal Amatlán, Estado de Oaxaca, impugna de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la referida Entidad Federativa, lo siguiente:

“IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN CUYA INVALIDEZ SE DEMANDE, ASÍ COMO, EN SU CASO, EL MEDIO OFICIAL EN QUE SE HUBIERAN PUBLICADO

De la Sexagésima Quinta Legislatura y/o Sexagésima Quinta Legislatura (sic) Honorable Congreso del Estado y/o Poder Legislativo del Estado de Oaxaca (sic), reclamamos:

1.-El (sic) Dictamen de la Comisión Permanente de Gobierno y Asuntos Agrarios, del Poder Legislativo, u órgano interno del Congreso del Estado, mediante el cual se propone ante la Honorable Asamblea del Congreso del Estado de Oaxaca, la suspensión y desaparición de poderes del Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Cristóbal Amatlán, Oaxaca, periodo 2023-2025, aprobado en sesión extraordinaria el once de marzo del presente año.

2.-El (sic) decreto, resolución, acuerdo, dictamen u (sic) cualquier otro documento que haya emitido la Legislatura donde se haya aprobado la suspensión (sic) Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Cristóbal Amatlán, Oaxaca, periodo 2023-2025.

3.-Los (sic) actos de ejecución que haya ordenado el pleno del Congreso del Estado de Oaxaca para dar cumplimiento a dicho decreto, resolución, acuerdo, dictamen, donde se ordena la suspensión del Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Cristóbal Amatlán, Oaxaca.

4.-La (sic) inminente determinación por la Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en el (sic) cual nombra a un encargado de la Administración Municipal o un Consejo Municipal en el Municipio de San Cristóbal Amatlán, Oaxaca, periodo 2023-2025.

(...).

COMPETENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

Es competente el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente (sic) para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso j) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por tratarse de un conflicto entre el Municipio de San Cristóbal Amatlán, del Estado de Oaxaca y los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Entidad.

OPORTUNIDAD EN LA PROMOCIÓN.

Del escrito integral de demanda se advierte que el municipio actor impugna en la presente controversia constitucional (sic) lo siguiente:

a) El artículo 59 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca y

b) el (sic) Dictamen de fecha diez de marzo de dos mil veinticinco por el cual se aprueba el decreto en sesión extraordinaria el día once de marzo de la presente anualidad, derivado del expediente: CPGAA/065/2025, por el que se declara la suspensión del Ayuntamiento de San Cristóbal Amatlán, del Estado de Oaxaca, y se ordenó comunicar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que en tanto se resuelva el fondo del asunto, designe a un Comisionado Municipal, con fundamento en el primer párrafo del artículo 66 de la Ley Orgánica Municipal, a efecto de garantizar las funciones y la prestación de servicios públicos que corresponden al Ayuntamiento. (...).

Respecto del decreto emitido por el Congreso del Estado de Oaxaca, se advierte que constituye un acto, por referirse a situaciones particulares y concretas. El acto que perjudica a los suscritos, representando el municipio es la declaración de suspensión provisional emitida por el Poder Legislativo del Estado respecto del Ayuntamiento del Municipio actor, así como la autorización para nombrar a un comisionado municipal derivada del propio decreto impugnado.

En esas circunstancias, las fracciones I y II del artículo 21 de la Ley Reglamentaria de la materia, (sic) indican que al impugnarse actos, la demanda deberá promoverse dentro de los siguientes treinta días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de la resolución impugnada, al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que el actor se ostente sabedor; o bien, a partir del día siguiente de la fecha de su publicación, tratándose de normas generales, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.

Cabe precisar que la impugnación del artículo 59 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca se hace con motivo de su primer acto de aplicación, el cual se hizo consistir en el Decreto aprobado derivado del expediente: CPGAA/065/2025 de fecha diez de marzo del dos mil veinticinco, mediante el cual el Poder Legislativo del Estado de Oaxaca aprueba la suspensión del Ayuntamiento de San Cristóbal Amatlán, Oaxaca, y ordena comunicar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que en tanto se resuelva el fondo del asunto, designe a un Comisionado Municipal, con fundamento en el primer párrafo del artículo 66 de la Ley Orgánica Municipal. (...). (EL SUBRAYADO ES AÑADIDO)

Por otra parte, en cuanto a los actos impugnados, por su importancia se presentan los siguientes antecedentes:

“1. En el Municipio de San Cristóbal Amatlán, Oaxaca, la elección de los integrantes del Ayuntamiento se sujeta al **Régimen de sistemas normativos internos**.

2. Con fecha 7 de diciembre de 2022, se llevó a cabo la elección de autoridades municipales donde obtuvimos el triunfo y por tal razón el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, conforme lo establece el artículo 114 Ter de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, expidió la Constancia de Mayoría y Validez a favor de las y los Concejales a nuestro favor (sic)

3. El día 1 de enero del año 2023, a las 10:00 horas, se realizó la Sesión Solemne de Instalación de Cabildo, del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Cristóbal Amatlán, Oaxaca, para ejercer el cargo público durante el periodo constitucional 2023-2025; conforme lo dispone el artículo 36 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.

4. El día 1 de enero de 2023, se llevó a cabo el acta de sesión ordinaria de cabildo por medio de la cual se asignaron regidurías y comisiones municipales, y en la cual se me asignó el cargo de Síndica Municipal del Ayuntamiento Constitucional referido; conforme lo dispone el artículo 36-BIS de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.

5. En términos de los artículos 1, 2, 115 fracciones I y II, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113 párrafo tercero fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 2, 29 y 30, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, el Municipio de San Cristóbal Amatlán, Oaxaca, es un orden de gobierno, investido de personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo órgano de gobierno es el Ayuntamiento Constitucional que se encuentra integrado por el Presidente Municipal, la suscrita Síndica Municipal y cinco Regidoras y Regidores; donde para velar por los intereses del mismo y de los concejales que conforman (sic), tengo la obligación y la atribución legal de defender sus intereses, y los del suscrito, sin necesidad de requerir formalidades especiales o específicas para ello, atendiendo lo dispuesto por el artículo 71, fracciones I y XXII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca. (...).

6. Así pues, durante estos dos años de nuestra administración, el Ayuntamiento que represento, se enfocó a ejercer sus funciones y además gestionar y aplicar los recursos municipales para obras en beneficio de nuestra comunidad.

7. Hemos trabajado con normalidad en el Ayuntamiento Constitucional del Municipio aludido; sin embargo, un grupo de aproximadamente 12 personas, la mayoría del sexo masculino, al no verse favorecidas en las pasadas elecciones para satisfacer sus pretensiones políticas y al no permitir que el Ayuntamiento este (sic) integrado por personas del sexo femenino; han iniciado un proceso de actos de desestabilización en la población, lo que provocó que el Poder Legislativo del Estado de Oaxaca, infiera (sic) de manera ilegal en el ámbito de las atribuciones y competencia del Ayuntamiento Constitucional del Municipio que represento para generar presión para poder tener un cabildo a modo que les de las facilidades de poner gente o personas a su conveniencia la mayoría del sexo masculino y nuevamente obstaculizar el ejercicio del cargo a las personas del sexo femenino como la mayoría que lo integra en este momento.

Por lo anterior, es evidente que no fuimos notificados legalmente de los actos que tildamos de inconstitucionales y fuera de procedimiento que marca la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, violando los principios de debido proceso, defensa adecuada, y audiencia.” (EL SUBRAYADO ES AÑADIDO)

III. Solicitud de suspensión. En el capítulo correspondiente de la demanda, se solicita la suspensión de los actos impugnados en los siguientes términos:

“X. Suspensión.

Solicitamos la suspensión provisional (sic), ya que esta figura procesal aunque con características muy particulares, participa de la naturaleza de las medidas cautelares, por lo que en primer lugar tiene como fin preservar la materia del juicio, asegurando provisionalmente el bien jurídico de que se trate para que la sentencia que, en su caso, declare el derecho de la parte actora, pueda ejecutarse eficaz e íntegramente y, en segundo, tiende a prevenir el daño trascendente que pudiera ocasionarse a las partes y a la sociedad en general en tanto se resuelve el juicio principal, vinculando a las autoridades contra las que se concede a cumplirla, en

aras de proteger el bien jurídico de que se trate y sujetándolas a un régimen de responsabilidades cuando no la acaten.

Cabe destacar que por lo que respecta a este régimen, la controversia constitucional se instituyó como un medio de defensa entre poderes y órganos de poder, que tiene entre otros fines el bienestar de la persona que se encuentra bajo el imperio de aquéllos, lo que da un carácter particular al régimen de responsabilidades de quienes incumplen con la suspensión decretada, pues no es el interés individual el que se protege con dicha medida cautelar, sino el de la sociedad, como se reconoce en el artículo 15 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sírvase como sustento la jurisprudencia de rubro **SUSPENSIÓN EN CONTROVERSI A CONSTITUCIONAL. NATURALEZA Y FINES.**

Es así que para preservar la materia del juicio y para prevenir el daño trascendente que pudiera ocasionarse a las partes y a la sociedad en general en tanto se resuelve el juicio principal solicitamos la suspensión provisional (sic) del decreto impugnado.

Respecto al Poder Legislativo del Estado de Oaxaca. (sic) con fundamento en os (sic) artículos 14, 15, 17 y 18 de la Ley Reglamentaria de las fracciones (sic) I y II del artículo (sic) 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y toda vez que no se pone en peligro la seguridad o economía y seguridad nacionales, ni las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, y si se sigue perjuicio al interés social y puede afectar gravemente a la población del Municipio de San Cristóbal Amatlán, Oaxaca, porque con los actos del Poder demandado menoscaba el marco jurídico nacional; **solicitamos que urgentemente se decrete la suspensión de los actos cuya invalidez demando, refiriéndome al acto de la Comisión Permanente de Gobierno y Asuntos Agrarios del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, consistente en el procedimiento, dictamen, resolución, acuerdo, decreto orden (sic) o procedimiento, autorización verbal o por escrita emitida (sic), por medio del cual en forma inconstitucional e ilegal, y de propia autoridad, ordena la suspensión o desaparición del Ayuntamiento de San Cristóbal Amatlán, Oaxaca, periodo 2023-2025.** Vulnerándose e incidiendo con su actuar, la garantía de audiencia y legalidad y seguridad jurídica del que debe gozar todo gobernado (sic), establecidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la autonomía municipal y libre determinación del Municipio de San Cristóbal Amatlán, Oaxaca, y desde luego la integridad de los integrantes (sic) del Ayuntamiento municipal que represento, pues somos una comunidad indígena como lo dispone el artículo 2 de la constitución Federal quienes nos regios (sic) como lo señala el artículo 115 de la Constitución Federal.

Lo anterior para que ordenen al Congreso del Estado de Oaxaca que se abstenga de ejecutar cualquier resolución que suspenda o desaparezca el Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Cristóbal Amatlán, Oaxaca, con el fin de preservar la materia del juicio, asegurando provisionalmente la situación jurídica, el derecho o el interés de mi representado y evitar se cause un daño irreparable, en cuanto a la posibilidad de que se decrete (sic) el interés de mi representado y se evite se cause un daño irreparable en cuanto a la posibilidad de que se decrete la suspensión o se determine (sic) desaparición del Ayuntamiento.

Así mismo, **se solicita para que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación:**

- **Ordene la suspensión de los efectos jurídicos y de ejecución de toda orden verbal o escrita, procedimiento, dictamen, resolución, acuerdo y/o decreto por medio del cual se haya resuelto sobre la suspensión del Honorable Ayuntamiento de San Cristóbal Amatlán, Oaxaca.**
- **Deje sin efectos jurídicos y de ejecución el nombramiento por parte del Congreso del Estado de Oaxaca, de un Comisionado Municipal y/o Consejo Municipal en sustitución de los integrantes del Ayuntamiento Constitucional de San Cristóbal Amatlán, Oaxaca.**

Todo lo anterior, con la finalidad que nuestro Ayuntamiento pueda continuar despachando los asuntos de su competencia de manera adecuada, y no exista una merma considerable en el funcionamiento, facultades y atribuciones que otorga la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.

Se precisa que las suspensiones se solicitan (sic) para el efecto de que se paralicen los actos de ejecución de los actos del Congreso del Estado de Oaxaca, hasta en tanto, esta Suprema Corte de

Justicia de la Nación se pronuncie sobre la constitucionalidad de los mismos.

Así, dada la apariencia del buen derecho que le asiste al Ayuntamiento de San Cristóbal Amatlán, Oaxaca, y atendiendo las circunstancias y características particulares de esta controversia; solicito que con la medida provisional se garantice el pleno goce de los derechos del Ayuntamiento y sus integrantes, suspensiones (sic) que solicito (sic) se hagan efectivas hasta en tanto ese Alto Tribunal de la Nación se pronuncie en cuanto al fondo del asunto.

Todo lo anterior, de conformidad y en estricto apego a lo establecido en la jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente:

"SUSPENSIÓN EN CONTROVERSI A CONSTITUCIONAL, NATURALEZA Y FINES."

SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE COPIAS CERIFICADAS SOBRE LA SUSPENSIÓN QUE SE LLEGUE A DICTAR":

Ahora, de manera **AD CAUTELAM**, para el caso de que se haya dejado un comisionado municipal.

Se destaca que en la tesis aislada 2a. LXVII/2000, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro "**CONTROVERSI AS CONSTITUCIONALES. NO PROCEDE EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN EN CONTRA DE ACTOS CONSUMADOS.**", se establece un criterio clave que delimita la viabilidad de conceder la suspensión en el contexto de una controversia constitucional. Según este criterio, otorgar la suspensión contra actos consumados equivaldría, en esencia, a otorgarle efectos restitutorios a dicha medida, lo cual se considera improcedente.

Sin embargo, este criterio no es absoluto, ya que existen circunstancias excepcionales en las que sí procede otorgar la suspensión anticipando los posibles resultados que pudieran derivarse de la resolución de fondo que se dicte. Esta excepción se fundamenta en la razonable probabilidad de que las pretensiones del promovente tengan una apariencia de juridicidad y que exista un peligro en la demora de su concesión.

De acuerdo con el artículo 18 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para otorgar la suspensión **se deben tomar en cuenta las circunstancias particulares del caso, lo que implica realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante.** Esta anticipación se fundamenta en que la suspensión es una medida cautelar, y como tal, está sujeta a ciertos principios generales, como la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora.

La apariencia del buen derecho implica una credibilidad objetiva y sería que descarte una pretensión manifiestamente infundada, mientras que el peligro en la demora se refiere a la posible frustración de los derechos del promovente como resultado de la tardanza en la resolución de fondo. Por lo tanto, si bien la suspensión no implica una restitución, sino un adelanto provisional del derecho cuestionado, su efecto es interrumpir un determinado estado de cosas mientras se resuelve el fondo del asunto.

Es importante destacar que, si las pretensiones del actor resultan infundadas porque la apariencia del buen derecho fue equivocada, los actos suspendidos pueden reanudarse sin poner en peligro la seguridad o la economía nacional, o

afectar gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios obtenidos con la suspensión. Estas son las limitantes establecidas por el artículo 15 de la ley reglamentaria antes mencionada. En suma, el otorgamiento de la suspensión en casos de controversias constitucionales debe analizarse cuidadosamente a la luz de los principios jurídicos y las circunstancias específicas de cada caso. Sirve de sustento la jurisprudencia de rubro **SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE HACER UNA APRECIACIÓN ANTICIPADA DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO (APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y PELIGRO EN LA DEMORA)**.

Ahora, atendiendo las circunstancias particulares del caso, si bien es cierto que se nombra un encargado de la administración municipal en términos del artículo 66, párrafo primero de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, también lo es que **el artículo 59 (fundamento base para suspender el ayuntamiento) ya ha sido declarado inválido en (sic) controversia constitucional 31/2014.**

En el antecedente citado se cuestiona la validez del artículo 59 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, el cual otorga a la Legislatura local la facultad de suspender provisionalmente a los Ayuntamientos como medida cautelar. Se argumenta que esta disposición contradice el artículo 115, fracción I, párrafo tercero de la Constitución Federal, el cual establece la suspensión de los Ayuntamientos de manera general, sin distinguirla como provisional o definitiva.

El artículo impugnado permite a la legislatura local suspender a un Ayuntamiento en caso de violencia grave, vacío de autoridad o estado de ingobernabilidad, otorgando esta medida como cautelar y sin especificar un plazo para resolver el fondo del asunto. Además, no establece criterios claros sobre la gravedad de la falta, la proporción de la violencia o la medida de vacío de autoridad que justifique la aplicación de la suspensión.

Así, el Máximo Tribunal menciona el antecedente referido, tal disposición contraviene la Constitución, ya que amplía las facultades de la legislatura local más allá de lo previsto en el artículo 115 constitucional. Por lo tanto, se concluye con la declarativa de invalidez del artículo 59 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.

Por lo tanto, en la oportunidad de que la suspensión sea concedida para efectos de que si a la fecha en que se provee la suspensión ya existe un encargado de la administración municipal es oportuno de que dicho nombramiento quede sin efectos provisionalmente, ello para que los integrantes del ayuntamiento previamente electos por la mayoría puedan continuar sus funciones lo que no transgrediría ningún derecho o principio.

Pues de llevar a cabo dichos actos, se dejaría sin materia este asunto. (sic) ello sin que implique, desde luego, en modo alguno, prorrogar el mandato de los integrantes del ayuntamiento que actualmente están en funciones.

Con el otorgamiento de la suspensión en los términos precisados, no se afectan la seguridad y economía nacionales, ni las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, puesto que únicamente se pretende preservar la materia del juicio, asegurando provisionalmente la situación jurídica, el derecho o el interés de la parte actora y evitar se nos cause un daño irreparable, toda vez que de ejecutarse los actos impugnados, podría quedar sin materia la controversia constitucional; además, no se causa un daño mayor a la sociedad en relación con los beneficios que pudiera obtener el solicitante de la medida puesto que, únicamente, se suspende la ejecución de los actos impugnados, a fin de salvaguardar la autonomía municipal, respetándose los principios básicos que rigen la vida política, social o económica del país, en beneficio de la colectividad.

Aunado a lo anterior, los que integramos la vida política en el ayuntamiento gozamos de un derecho político electoral del voto es un aspecto fundamental de la participación ciudadana en la democracia. Siendo el derecho de los ciudadanos a elegir a sus representantes mediante el sufragio, así como a ser elegidos para

ocupar cargos públicos. El voto es una expresión de la voluntad popular que permite a los individuos influir en la toma de decisiones políticas y en la conformación de los órganos de gobierno. Este derecho garantiza la igualdad de participación de todos los ciudadanos en el proceso electoral, independientemente de su origen, género, religión o condición social. Además, implica el deber cívico de ejercerlo de manera libre y consciente, contribuyendo así al fortalecimiento de la democracia y al respeto de los principios de legalidad y transparencia en los procesos electorales (sic)

Solicito que se me autorice la expedición de las copias certificadas por duplicado del proveído, que, en su caso, conceda dicha suspensión; y desde este momento autorizo a los delegados (sic) antes citados, para recibir en mi nombre y representación el auto de suspensión solicitado.

*De igual forma **solicito que la suspensión que llegue a dictarse se notifique por la vía más expedita a la autoridad demandada.***

Ahora bien, del estudio integral de la demanda se desprende que la medida cautelar se solicita, en esencia, para que se suspenda la ejecución de los actos cuya invalidez demanda el Municipio de San Cristóbal Amatlán, Estado de Oaxaca y, en ese sentido, destaca la Síndica accionante para que no se ejecute la suspensión del Ayuntamiento de ese Municipio dentro del procedimiento legislativo de desaparición del órgano de gobierno municipal, ni se nombre a un encargado de la Administración Municipal y/o un Concejo Municipal y, en caso de ya se haya designado, no ejerza funciones en sustitución de los integrantes del Ayuntamiento.

En esa tesitura y en lo que se refiere a los procedimientos legislativos de suspensión y/o desaparición de Ayuntamientos, se precisa que el Poder Reformador de la Constitución estableció como prerrogativa principal de los Ayuntamientos la salvaguarda de su integración, debido a que ésta tiene lugar con motivo de un proceso de elección popular directa por el que la comunidad municipal otorga un mandato político a determinado plazo, el cual, por disposición fundamental debe ser respetado, excepto en casos extraordinarios previstos en la legislación local.

Lo anterior en el entendido de que, como se desprende del artículo 55, fracción I, de la Ley Reglamentaria, la suspensión vincula a todas las autoridades en el ámbito de su competencia, con independencia de que no tengan el carácter de autoridades demandadas.

Al efecto, resulta aplicable lo determinado por el Tribunal Pleno en la jurisprudencia siguiente:

“CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SE ACTUALIZA EL INTERÉS LEGÍTIMO DEL MUNICIPIO PARA ACUDIR A ESTA VÍA CUANDO SE EMITAN ACTOS DE AUTORIDAD QUE VULNEREN SU INTEGRACIÓN. De la teleología de la fracción I del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contenida en la exposición de motivos de la reforma promulgada el dos de febrero de mil novecientos ochenta y tres, publicada en el Diario Oficial de la Federación el

día siguiente, se desprende que el Poder Reformador de la Constitución Federal estableció como prerrogativa principal de los Ayuntamientos la salvaguarda de su integración, debido a que ésta tiene lugar con motivo de un proceso de elección popular directa por el que la comunidad municipal otorga un mandato político a determinado plazo, el cual por disposición fundamental debe ser respetado, excepto en casos extraordinarios previstos en la legislación local. Asimismo, se estableció que la integración de los Ayuntamientos tiene como fin preservar a las instituciones municipales frente a injerencias o intervenciones ajenas, en aras de un principio de seguridad jurídica que permita hacer efectiva su autonomía política. Con lo anterior, queda de manifiesto que si por disposición fundamental la integración de los Ayuntamientos constituye una prerrogativa para el buen funcionamiento de los Municipios, es claro que las resoluciones dictadas por autoridades estatales que determinen la separación del presidente municipal de su cargo con motivo de conductas relativas a su función pública, afectan su integración y como consecuencia su orden administrativo y político, con lo cual se actualiza el interés legítimo del Ayuntamiento para acudir en vía de controversia constitucional a deducir los derechos derivados de su integración.³

Asimismo, a fin de proveer sobre la solicitud de suspensión, es necesario acudir al texto vigente de los artículos 58, 59 y 62 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, que establecen:

“ARTÍCULO 58. Son causas graves para la desaparición de un Ayuntamiento:

- I. Cuando sea imposible el funcionamiento, por falta absoluta de la mayoría de sus integrantes, si no existen suplentes que puedan integrarlo, cualquiera que fueren las causas que motiven dicha falta;
- II. Poner en riesgo la vida, salud, dignidad o la violación reiterada por parte del Ayuntamiento de los Derechos Humanos y las garantías de sus habitantes, consignadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Local.
- III. La promoción o adopción que realice un Ayuntamiento, de formas de gobierno u organización política, distintas a las establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado;
- IV. Los conflictos reiterados que se susciten entre la mayoría o totalidad de los integrantes de un Ayuntamiento, o entre éste y la comunidad, y que hagan imposible el cumplimiento de los fines o el ejercicio de las funciones a cargo del ayuntamiento;
- V. La violación que efectuó el ayuntamiento a las normas jurídicas que rigen los procesos electorales;
- VI. La repetida alteración por parte del Ayuntamiento a la Ley de Ingresos, al Presupuesto de Egresos, o a los planes y programas de desarrollo municipal, que importen un perjuicio a los habitantes del municipio o su hacienda pública;
- VII. La disposición de bienes pertenecientes al patrimonio municipal que ordene el Ayuntamiento, sin sujetarse a las disposiciones previstas en la presente Ley;
- VIII. Cuando el ayuntamiento permita que extranjeros se inmiscuyan en asuntos internos del Estado o de los Municipios;
- IX. La falta de comprobación y aplicación correcta de los recursos que integran la Hacienda Pública Municipal, en términos de lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Oaxaca y demás disposiciones aplicables; y,
- X. Por abandono del ejercicio de sus funciones.

³ Tesis 84/2001, Jurisprudencia, Pleno, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, correspondiente al mes de julio de dos mil uno, página novecientas veinticinco con número de registro 189325.

ARTÍCULO 59. *En el caso de desaparición de un ayuntamiento, el Congreso por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán decretar la suspensión ante una situación de violencia grave, un vacío de autoridad o estado de ingobernabilidad, antes de emitir esta medida, el Congreso dará oportunidad al representante jurídico del Municipio o a sus integrantes de ser oídos y exponer lo que a su derecho proceda.*

De declararse desaparecido un Ayuntamiento, por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros, conforme a la Ley no procede que entren en funciones los suplentes, el Congreso hará del conocimiento del Titular del Poder Ejecutivo mismo que procederá a proponerle la integración de un Concejo Municipal, en los términos establecidos por la Constitución Local y por esta Ley.

ARTÍCULO 62. *Compete exclusivamente al Congreso del Estado declarar la suspensión o desaparición de un Ayuntamiento, así como la suspensión o revocación del mandato de uno o más de sus integrantes.*

La solicitud para estos casos deberá presentarse ante la Secretaría de Servicios Parlamentarios del Congreso del Estado. Podrá ser formulada por el Titular del Ejecutivo del Estado, por los legisladores locales, por los integrantes del ayuntamiento respectivo o por los ciudadanos vecinos del municipio.”

De los preceptos legales que anteceden se advierte que el Poder Legislativo del Estado de Oaxaca, está facultado para decretar la desaparición de los Ayuntamientos de la entidad y, asimismo, dentro de esos procedimientos puede decretar como medida precautoria, la suspensión del propio órgano de gobierno municipal, por alguna de las causas que establece el artículo 59 de la Ley Orgánica Municipal del Estado.

IV. Decisión. Precisado lo anterior y por orden de importancia respecto de la salvaguarda de la integración del Ayuntamiento, atendiendo a las características particulares del caso y a la naturaleza de los actos impugnados, sin prejuzgar el fondo del asunto que será motivo de estudio en la sentencia que, en su oportunidad, se dicte, **procede conceder la suspensión** en la presente controversia constitucional, con el fin de preservar la materia del juicio, asegurando provisionalmente la situación jurídica, el derecho o el interés de la parte actora y evitar se le cause un daño irreparable, **para que no se ejecute cualquier orden y/o mandato encaminado a suspender y/o desaparecer el Ayuntamiento accionante, además, para que no ejerza funciones en sustitución de los integrantes del Ayuntamiento un encargado de la administración municipal y/o un Concejo Municipal que, en su caso, haya sido designado por el Congreso local,** hasta en tanto esta Suprema Corte se pronuncie respecto del fondo del asunto.

Cabe destacar, que con la concesión de la medida cautelar no se impide al Poder Legislativo local que en uso de sus atribuciones

constitucionales y legales, pueda instruir, en su caso, el procedimiento de desaparición del Ayuntamiento, toda vez que se trata de una institución fundamental del orden jurídico mexicano, contemplada en el artículo 115, fracción I, de la Constitución Federal, de tal forma que la medida cautelar no puede tener por efecto, como lo pretende la promovente, que se suspendan en lo general, los actos cuya invalidez demanda, sino que, **únicamente el órgano legislativo estatal deberá abstenerse de ejecutar los efectos o consecuencias de cualquier orden y/o mandato encaminado a suspender o desaparecer el Ayuntamiento actor, y para que no ejerza funciones el Comisionado Municipal y/o Concejo Municipal que, en su caso, haya designado en sustitución de los miembros del Ayuntamiento,** hasta en tanto se dicte la sentencia definitiva en este asunto, pues de ejecutarse esos actos se dejaría sin materia el fondo del asunto.

Resulta aplicable la tesis de la Segunda Sala de esta Suprema Corte, de rubro y texto siguientes:

“SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL MINISTRO INSTRUCTOR TIENE FACULTADES PARA DECRETARLA NO SÓLO RESPECTO DEL ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDE, SINO TAMBIÉN RESPECTO DE SUS EFECTOS O CONSECUENCIAS. De lo dispuesto en los artículos 14, 18 y 35 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que la suspensión del acto cuya invalidez se demande en una controversia constitucional puede concederse de oficio o a petición de parte, con base en los elementos proporcionados por las partes o recabados por el Ministro instructor. Atento lo anterior, se concluye que el Ministro instructor se encuentra facultado legalmente para decretar la suspensión respecto de los efectos y consecuencias del acto materia de la controversia, con independencia de que se haya solicitado respecto de ellos la suspensión, al ser necesariamente materia de la controversia por tener su origen en el acto cuya declaración de invalidez se solicita, pues es deber del Ministro instructor atender a las circunstancias y características particulares del caso, lo que le permite tomar diversas determinaciones respecto a los diferentes actos materia de la controversia constitucional.”⁴

Esta medida cautelar deberá hacerse efectiva por parte de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Oaxaca, por sí o a través de sus órganos subordinados, por lo que deberán abstenerse de ejecutar, exigir, requerir o solicitar el cumplimiento de las resoluciones que, en su caso, se dicten.

⁴ Tesis **2a. I/2003**, Aislada, Segunda Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, correspondiente al mes de febrero de dos mil tres, página setecientos sesenta y dos, con número de registro 184745.

Asimismo, también resulta procedente otorgar la suspensión para que los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Oaxaca, suministren los recursos económicos estatales y federales que constitucional y legalmente le corresponden al Municipio actor, principalmente las participaciones correspondientes a los ramos 28 y 33, fondos III y IV, y no se interrumpa su entrega, por conducto de la persona o personas que legalmente se encuentren facultadas para ello.

En ese sentido, la suspensión se concede para el efecto de que el Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, por sí o a través de sus órganos subordinados, como el Secretario de Finanzas, no ejecute cualquier orden o acuerdo, que tenga como finalidad retener los recursos económicos que constitucional y legalmente le corresponden al Municipio actor, por lo que se concede la suspensión en los términos precisados, a fin de salvaguardar la continuidad en el ejercicio de las funciones del Ayuntamiento.

Cabe precisar que con la medida cautelar concedida en el presente acuerdo, no se afecta la seguridad ni economía nacionales, puesto que únicamente se pretende salvaguardar la integración del Ayuntamiento y su autonomía municipal; tampoco se afectan las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, ya que se respetan los principios básicos que derivan de la Constitución Federal, que rigen la vida política, social o económica del país. Asimismo, con el otorgamiento de la suspensión no se causa un daño mayor a la sociedad, con relación al beneficio que pudiera obtener el solicitante de la medida, ya que precisamente se trata de salvaguardar el normal desarrollo de la administración pública municipal, en beneficio de la colectividad.

Finalmente, es importante precisar que la suspensión otorgada no causará efectos si al momento de su emisión ya se hubieran ejecutado los actos sobre los cuales opera la medida cautelar.

En consecuencia, atento a lo razonado con antelación, se:

A C U E R D A

PRIMERO. Se concede la suspensión solicitada por la Síndica del Municipio de San Cristóbal Amatlán, Estado de Oaxaca, en los términos y para los efectos precisados en el Punto IV de este proveído.

SEGUNDO. La medida suspensiva surtirá efectos de inmediato y sin necesidad de otorgar garantía alguna, sin perjuicio de que pueda

modificarse o revocarse derivado de algún hecho superveniente, conforme a lo previsto por el artículo 17 de la Ley Reglamentaria.

TERCERO. Para el debido cumplimiento de la presente medida cautelar notifíquese este proveído a la Comisión Permanente de Gobierno y Asuntos Agrarios y a los Secretarios de Gobierno y de Finanzas, dependientes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Oaxaca.

V. Solicitud de copias. Por otra parte, como lo solicita la Síndica del Municipio actor, se autoriza a su costa la expedición de las copias certificadas por duplicado de este proveído, previa constancia que por su recibo se agregue al expediente, de conformidad con el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del 1 de la Ley Reglamentaria.

VI. Habilitación de días y horas. Con apoyo en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se habilitan los días y horas que se requieran para llevar a cabo las notificaciones del presente acuerdo.

Notifíquese. Por lista al Municipio actor; por oficio a las partes, en sus residencias oficiales a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Oaxaca, así como al Presidente de la Comisión Permanente de Gobierno y Asuntos Agrarios, y a los Secretarios de Gobierno y de Finanzas, dependientes de los referidos Poderes, para el debido cumplimiento de la suspensión de que se trata; y electrónicamente a la Fiscalía General de la República.

En ese orden de ideas, **remítase la versión digitalizada del presente acuerdo** a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad de San Bartolo Coyotepec, por conducto del **MINTERSCJN**, regulado en el Acuerdo General Plenario **12/2014**, a fin de que genere la boleta de turno y la envíe al órgano jurisdiccional que corresponda, para que de conformidad con los artículos 223 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 4, párrafo primero, y 5 de la normativa reglamentaria, **lleve a cabo las diligencias de notificación por oficio, en sus residencias oficiales, a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos de la referida entidad federativa, así como al Presidente de la Comisión Permanente de Gobierno y Asuntos Agrarios, y a los Secretarios de Gobierno y de Finanzas, dependientes de los referidos Poderes,** de lo ya indicado, debiendo levantar las razones actuariales respectivas.

Lo anterior, en la inteligencia de que para los efectos de lo previsto en

los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la copia digitalizada de este proveído, en la que conste la evidencia criptográfica de la firma electrónica del servidor público responsable de su remisión por el **MINTERSCJN**, hace las veces **del despacho número 361/2025**, por lo que se requiere al órgano jurisdiccional respectivo, a fin de que a la brevedad posible, lo devuelva debidamente diligenciado por esa misma vía.

Por lo que hace a la notificación de la Fiscalía General de la República, remítasele la versión digitalizada del presente auto por conducto del **MINTERSCJN**, que hace las veces del respectivo oficio de notificación. Dicha notificación se tendrá por realizada **al día siguiente a la fecha en la que se haya generado el acuse de envío en el Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.**

Cúmplase.

Lo proveyó y firma el **Ministro instructor Alberto Pérez Dayán**, quien actúa con el **Maestro Eduardo Aranda Martínez**, Secretario de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal, que da fe.

INCIDENTE DE SUSPENSIÓN EN CONTROVERSI CONSTITUCIONAL 147/2025

Evidencia criptográfica · Firma electrónica certificada

Nombre del documento firmado: Acuerdo.doc

Identificador de proceso de firma: 711011

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre	ALBERTO GELACIO PEREZ DAYAN	Estado del certificado	OK	Vigente
	CURP	PXDA601213HDFRYL01			
Firma	Serie del certificado del firmante	636a6673636a6e000000000000000000000002cf	Revocación	OK	No revocado
	Fecha (UTC / Ciudad de México)	09/04/2025T20:59:14Z / 09/04/2025T14:59:14-06:00	Estatus firma	OK	Valida
	Algoritmo	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma	0a 3e 69 54 de ec 2d 5b 4e cf ea 22 4e 38 56 1f d5 2d 88 8e cd 13 d8 6c 18 0b 6f 05 1f 2a f3 8b 8c 84 f7 28 ae 5b cc f4 9d 5e a3 98 e9 d4 d3 64 a5 06 ce 5f c0 c5 9f 1f a2 df 1f 9c a8 78 82 d4 68 ae cf d4 1c 76 36 88 01 61 1a ea c1 e7 63 c4 43 c3 43 d3 9d 4d 2d 1c db 15 d9 17 30 29 ce 47 62 fb fd 17 a3 d5 bc 62 08 68 ea 2e 4a 51 61 05 57 e4 4a c4 f2 bc 51 54 ba 8a 76 5e 77 11 6a ef 37 d2 02 e1 d1 0d 92 3b 30 29 91 15 be ec 5c 25 96 88 d4 a0 1d 44 84 03 1f 6a 8b ca e6 df b1 45 e4 4a 69 f4 ff bd 4f b5 76 c2 13 8f 31 b2 e7 68 46 07 5d 13 be 5e 49 fa cc 0d ee fa a4 6b e2 11 b8 8e e9 34 cf 73 bb 01 c3 ce e7 09 a1 fe 22 b6 1b 8e 25 6b 19 2b dd 66 b3 fa 4f d9 85 d6 1d ab 90 f9 2d 25 17 97 1b 68 b5 fb ad cf f5 a9 7f e9 7e 14 28 44 72 f0 cc 30 2e e3 f3 2e 9d 03 24 43			
	Validación OCSP	Fecha (UTC / Ciudad de México)	09/04/2025T20:59:14Z / 09/04/2025T14:59:14-06:00		
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP	OCSP de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado de OCSP	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie del certificado OCSP	636a6673636a6e000000000000000000000002cf			
Estampa TSP	Fecha (UTC / Ciudad de México)	09/04/2025T20:59:14Z / 09/04/2025T14:59:14-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia	8511980			
	Datos estampillados	CDB4722151C36DFC94D3ED5CA731958AA0478B69DF5C9118EE1C7FE8BDEB966E			

Firmante	Nombre	EDUARDO ARANDA MARTINEZ	Estado del certificado	OK	Vigente
	CURP	AAME861230HOCRRD00			
Firma	Serie del certificado del firmante	706a6620636a663200000000000000000001cd5b	Revocación	OK	No revocado
	Fecha (UTC / Ciudad de México)	09/04/2025T20:18:41Z / 09/04/2025T14:18:41-06:00	Estatus firma	OK	Valida
	Algoritmo	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma	48 19 78 8c 65 c2 73 dd c8 cb 96 23 6f 41 9b a1 88 b4 dd 00 78 59 c9 7e a5 db ac f8 7f 2b 25 47 59 47 1c ac 38 da ab 53 fc 2f f7 4b 37 83 90 06 74 36 5b 3f 21 2f 8d 9c f1 dc a2 48 28 5e 65 2a e2 e6 84 fb 34 d5 64 1a 96 fd 9b 4d 0d b7 6e 27 46 66 f3 28 6b 37 ec ac 47 a9 db ec f3 d9 96 bd 51 9d a9 d3 02 46 cf 63 23 0a 08 5c b7 d5 74 f9 a5 98 24 32 38 a5 26 4f 05 8a ce 28 a3 72 a8 cc 21 ee 0e 0a 19 d4 e0 67 7d b0 19 5b 4b f2 93 de 94 94 2a 82 1e b2 e5 b2 8b 42 d9 86 d2 dc 3c 52 22 7f 8c 57 c9 79 d0 64 fa a2 49 db e6 02 34 ee 19 4a 24 f5 0b 7b 89 c6 c6 61 6a 81 0d be f9 f0 51 af 61 75 64 26 1f a5 2d 6c 0e 3a fe 7b a2 8a 96 cc 9a 3f 3f d7 23 62 ff 59 4b 26 17 51 82 f3 28 1e bc f2 ae 82 e1 ce e5 3c d3 b5 03 77 57 30 54 18 e1 d4 ea 01 cc 5a 94 0d c5 0d a5 33 06 10			
	Validación OCSP	Fecha (UTC / Ciudad de México)	09/04/2025T20:18:41Z / 09/04/2025T14:18:41-06:00		
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP	706a6620636a663200000000000000000001cd5b			
Estampa TSP	Fecha (UTC / Ciudad de México)	09/04/2025T20:18:41Z / 09/04/2025T14:18:41-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia	8511454			
	Datos estampillados	ADC5B98DA54C0EBD2499940284B404CC05782D0EAC351C4E9110043B46BD53F1			